



Marchamalo y Yunquera ya le han denunciado por malversación

Si bien el presupuesto de 60.000 € que la MAS destina a publicidad y propaganda ya es desmesurado para una entidad de su volumen y objetivos, el uso de estos recursos que salen del pago de la tasa de agua de los vecinos de todos los municipios abastecidos no estarían mal empleados si se destinaran a la función de educación y concienciación en la reducción del consumo del agua que siempre han tenido.

Sin embargo, en su afán de promoción y politización, Jaime Carnicero ha empleado más de 10.000 euros en una campaña publicitaria que no sirve para otra cosa que ensalzar su gestión y agredir a dos de los municipios que se han mostrado más beligerantes con su gestión, Marchamalo y Yunquera.

Ambos han recurrido ya a los juzgados para denunciar esta utilización indebida del dinero público en base al artículo 433 del Código Penal, contemplada como malversación de fondos públicos, y será un juez quién dictamine si este caso es merecedor de condena o no.

Para el regidor marchamalero, Rafael Esteban, esta campaña tiene "unos evidentes fines partidistas, en una campaña que busca claramente el autobombo y, después, el desprestigio de dos alcaldes simplemente porque son del PSOE, mostrando informaciones premeditadamente sesgadas y, en algunos aspectos, falsas, como demuestra el hecho de que la propia secretaria de la MAS ha certificado que Marchamalo no tiene deuda alguna por el pago de la tasa de agua. Nunca antes se había utilizado una mancomunidad con el sectarismo que lo está haciendo el señor Carnicero, y no vamos a permitir que se perjudique a nuestros vecinos por ello".

Carnicero, ante diversas causas judiciales por su gestión en la MAS

Se enfrentará a acciones legales por el cobro indebido de suplementos en la tasa del agua, malversación de fondos y posible prevaricación

Varios Ayuntamientos y algunos de sus representantes en la Mancomunidad del Aguas del Sorbe (MAS) han iniciado ya acciones legales contra el presidente de la entidad, Jaime Carnicero, por presunto uso indebido del dinero público. Carnicero habría cobrado ya más de 1,8 millones de

euros a los ayuntamientos mancomunados por la subida de tasas aprobada el año pasado con cargo a un servicio que aún no funciona y, además, estaría utilizando presuntamente fondos de la Mancomunidad "para perseguir a los municipios que no están de acuerdo con sus decisiones".

En julio del año pasado, Jaime Carnicero, Presidente de la MAS, decidió subir el precio del agua un 35%, sin ningún consenso y justificando este fuerte incremento en los costes de amortización y explotación de la tubería que conecta las instalaciones de la MAS con el embalse de Alcorlo, para garantizar el abastecimiento en épocas de sequía. Sin embargo, cuando ya ha pasado más de un año desde entonces, y más de cuatro desde que se terminaron las obras, esta infraestructura aún no ha entrado en funcionamiento. De hecho, Carnicero no ha logrado aún la concesión de agua que debe aprobar la Confederación Hidrográfica del Tajo para derivar caudales desde el embalse en caso de necesidad.

Pese a ello, el presidente de la MAS está cobrando a los ayuntamientos por un servicio que no reciben, y los 350.000 habitantes abastecidos por la MAS han pagado ya más de 1,8 millones de euros —a razón de 130.000 euros al mes—, cantidad que superará los 2,3 millones a finales de año. Ahora, el presidente quiere utilizar una parte de este dinero —en concreto, 500.000 euros— para financiar obras hidráulicas, en lo que Julio García, vocal de Azuqueca, ha calificado como "un uso fraudulento, porque primero nos ha cobrado indebidamente un di-



Julio García, concejal de Azuqueca, y el alcalde de Yunquera, José Luis González.

nero y ahora pretende devolver solo una parte y con condiciones totalmente arbitrarias".

"Lo que tiene que hacer es devolver todo, porque es un dinero de los ayuntamientos que no se está destinando al fin para el que se aprobó la subida de tasas el año pasado", aseguró el socialista, además de anunciar la intención de varios municipios de "ir donde sea preciso para denunciar este abuso". Según sus estimaciones, los vecinos de Alcalá de Henares han pagado ya

más de 750.000 euros por la puesta en marcha de la tubería de Alcorlo, que está inutilizada, los de Guadalajara casi 300.000 euros, y más de 100.000 euros los de Azuqueca. Alcalá, ya ha aprobado una moción de reprobación contra la gestión de Carnicero con el voto a favor de tres fuerzas políticas diferentes, hecho que previsiblemente se reproducirá en más municipios. Al respecto, el alcalde de Marchamalo ha declarado que "a mi desde luego se me caería la cara de vergüenza".

Casi 80.000 € en publicidad y otros 135.000 € en asesores y liberados

Desde que Jaime Carnicero, Concejal y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, se hiciera con la presidencia de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) al inicio de la presente legislatura, esta entidad de carácter puramente técnico y cuyo único objetivo es satisfacer una necesidad tan básica como es la del abastecimiento de agua, en el área más poblada de nuestra provincia, se ha convertido en algo más parecido a un cortijo particular desde el que Carnicero hace y deshace a su antojo sin más control que las quejas de los vocales de los municipios miembros que no se pliegan a sus designios personalistas. Nunca hasta ahora desde la presidencia de la MAS se habían dedicado tantos recursos a la promoción política de quién la encabeza, con una presencia constante en los medios de comunicación fabricada a golpe de talonario (el de la mancomunidad, claro). Ruedas de

prensa constantes, incluso para aspectos técnicos de ninguna trascendencia social, que son ampliamente cubiertas por los medios que se reparten los cerca de 80.000 euros anuales que la MAS viene dedicando a publicidad y propaganda, 20 veces más que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marchamalo, entidad local de presupuesto similar al suyo. Pero eso no es todo, Carnicero deja su impronta en cada una de sus acciones, no desaprovechando ninguna oportunidad para meter el dedo en el ojo a los municipios de la mancomunidad gobernados por otros partidos. En su momento fue la deuda provocada por los impagos de la Junta, ahora las subvenciones y el diferente rasero que emplea para evaluar los expedientes de cada pueblo. Todo ello mientras emplea otros 135.000 euros al año para pagar los puestos de tres asesores con contratos 'a dedo' afines a su partido político, el PP.